



Proceso	Verbal restitución de inmueble arrendado
Demandantes	Alberto Álvarez S. S.A., Distritex S.A.S. y Serna Duque S.A.S
Demandados	Álvaro Antonio Moreno Vélez, Carlos Moreno Vélez y la sociedad Distribuidora Tres Ases S.A.S
Radicado	05001 31 03 016 2019 0115 01
Procedencia	Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto auto	017
Decisión	Niega adición sentencia
Tema	Dispone el artículo 287 del Código General del Proceso en cuanto a la adición de la sentencia, que: (i) hay lugar a ello cuando se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la <i>litis</i> o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento; (ii) debe realizarse por medio de sentencia complementaria; (iii) la oportunidad es dentro del término de ejecutoria; y, (iv) procede de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

TRIBUNAL SUPERIOR

2023-049

SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, uno (1) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Los demandados Álvaro Antonio Moreno Vélez, Carlos Moreno Vélez y la sociedad Distribuidora Tres Ases S.A.S. solicitan adición de la sentencia de 19 de febrero pasado, notificada el 21 de febrero siguiente, en esencia porque no se examinó si el desahucio se había ajustado a las previsiones del artículo 518 del C. de Comercio, puesto que solo se limitó a hacerlo frente a la legitimación del actor para hacerlo.

“Específicamente, se manifestó en el memorial del 19 de julio de 2023, presentado por este apoderado que había, además de la falta de legitimación para hacer el desahucio: “... otras razones que impiden la prosperidad de la pretensión” y, entre ellas, se indicó expresamente la atipicidad y la falta de verdad en las razones indicadas como justificantes del desahucio, pues se demostró que la repotenciación ya se había hecho y que la redistribución de espacios no era una razón para terminar el contrato.” Quedando sin resolver una de las excepciones de mérito propuestas, que hace parte de los extremos del litigio.

I. CONSIDERACIONES

1. Dispone el artículo 287 del Código General del Proceso en cuanto a la adición de la sentencia, que: (i) hay lugar a ello cuando se omita la resolución de cualquiera de los extremos de la *litis* o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento; (ii) debe realizarse por medio de sentencia complementaria; (iii) la oportunidad es dentro del término de ejecutoria; y, (iv) procede de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

2. Se ha afirmado por los demandados que el Tribunal en su sentencia, se limitó a examinar si la parte demandante estaba legitimada para hacer el desahucio, pero no miró, de ninguna manera, si se ajustaba a las hipótesis del artículo 518 del C. de Comercio, aspecto que propuso como excepción de mérito.

En la petición de adición subyace modificación del fallo en clara prohibición de lo previsto en el artículo 285 ib. Cabe agregar que la constitucionalidad de la prohibición legal referida fue examinada

por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-548/97, frente al entonces artículo 309 del C. de Procedimiento Civil, por medio de la cual la declaró exequible con soporte en los siguientes fundamentos:

“(...) las sentencias obligan tanto al juez que las emite como a las partes, a las autoridades públicas y a los particulares sin que les sea dable a ninguno de ellos desconocerlas. Este es el sentido del carácter vinculante del ordenamiento jurídico, sin el cual las decisiones judiciales carecerían de eficacia

“Y obligan desde el momento en que se profieren, sin que pueda el funcionario que las emite revocarlas o modificarlas, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, materia de acusación. La expedición de la sentencia marca el fin de la competencia del juez para decidir acerca del litigio. Entonces, la prohibición prevista en la norma acusada, se ajusta plenamente a la Constitución, pues la regulación de los procesos, con indicación de las distintas etapas procesales, que incluye la atribución de competencia a cada autoridad judicial, es labor que corresponde determinar al legislador (art. 150 C.P.).

“Ahora bien: que las sentencias no puedan ser modificadas ni revocadas una vez emitidas, implica que conservan su obligatoriedad hasta tanto sean anuladas, revocadas o reformadas por la autoridad judicial a la que la ley faculta para ello, como en el caso de la consulta, o de la interposición de recursos y acciones por las autoridades públicas y las partes legitimadas. Es de señalar que la autoridad competente para modificar la sentencia o emitir una nueva decisión puede ser incluso el mismo juez que la profirió, pero siempre que medie orden de otra autoridad judicial, como en el caso de que la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario de casación declare la nulidad de la sentencia y ordene remitir nuevamente el expediente al tribunal o juzgado que incurrió en la causal para que reponga la actuación (art. 375 del C.P.C., en concordancia con el 368-5 ibídem); o cuando un juez, al desatar una acción de tutela, verifica que la decisión constituye una vía de hecho: la revoca y ordena al juez competente, que en su lugar dicte la sentencia correcta, y se restablezcan los derechos fundamentales violados, decisión vinculante para aquél, en caso de que ésta se encuentre ejecutoriada.

“La prohibición que tiene el juez de revocar o modificar su propia sentencia, no vulnera ninguna norma superior y, por el contrario, protege la seguridad jurídica -cuyo valor constitucional ya fue destacado- y permite el ejercicio de los controles y recursos que la ley procesal establece, pues sólo frente a una decisión inmodificable tienen eficacia los pronunciamientos posteriores de las autoridades judiciales. De no ser así podrían presentarse situaciones anómalas como ésta: que durante el término que tiene el funcionario o el ente judicial a quien corresponde decidir la apelación, la consulta, la casación, o la revisión de la sentencia, el juez que emitió el fallo objeto de

uno de estos recursos, modifique o revoque su decisión, haciendo que las sentencias posteriores resulten inocuas.

(...) la sentencia puede adolecer de errores como consecuencia de la falibilidad humana, y para corregirlos, el legislador ha establecido una serie de mecanismos, tales como los recursos y acciones.

“Conclusión

“La prohibición hecha al juez en la norma acusada, de reformar o revocar su propia sentencia, marca el límite de la competencia de dicho funcionario para conocer del litigio. Esa regulación se adecua a la Constitución, pues corresponde al legislador determinar el ámbito de competencia de las distintas autoridades judiciales, lo cual implica no sólo determinar los asuntos que les corresponde conocer sino el momento en que ésta se inicia y culmina.

“Esa decisión del legislador, como ya se expresó, no vulnera ninguna norma superior y, por el contrario, protege principios de orden constitucional, como la seguridad jurídica y la eficacia de los recursos y acciones que proceden contra las decisiones judiciales”. (Subrayas fuera de texto).

3. De otro lado, el acogimiento de las pretensiones una vez analizada la legitimación del demandante para efectuar el desahucio, y la no necesidad de probar la causal que lo motivó, implicó el despacho impróspero de las excepciones de mérito, lo que confirma la improcedencia de la adición de la sentencia.

II. DECISIÓN

Consecuente con lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN EN SALA TERCERA CIVIL DE DECISIÓN, RESUELVE:**

NEGAR la solicitud de adición de la sentencia del 19 de febrero pasado.

Ejecutoriado el presente auto continúese con el trámite del proceso.

NOTIFÍQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

NATTAN NISIMBLAT MURILLO
Magistrado
(con ausencia justificada)

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firmado Por:

Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6de1275e46c6ff7886611d441d20970d4205d528a696785552b3064bb1d6f64d**

Documento generado en 01/04/2024 09:37:05 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>